



Ministerio Público

Procuración General de la Nación

Tranamil, Carlos Enrique p.s.a. abuso sexual agravado
S.C. T. 418, L. XL

S u p r e m a C o r t e :

I

La Cámara Primera en lo Criminal de Trelew, provincia del Chubut, condenó a Carlos Enrique Tranamil a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en la modalidad del delito continuado (artículos 63 y 119, párrafos 1º, 3º y 4º, inciso “b”, del Código Penal).

Contra ese pronunciamiento, la defensa oficial dedujo recurso de casación, que fue declarado procedente en forma parcial. Al así decidir, y en lo que aquí interesa, el *a quo* rechazó los agravios referidos a la arbitraria valoración de la prueba por presentar el fallo vicios lógicos y vulnerar el principio de inocencia, con sustento en que no se demostró falta o contradicción esencial en la fundamentación de la resolución y que los motivos de la apelación exceden la competencia extraordinaria de la vía casatoria (fs. 431/450).

La impugnación federal articulada contra esa decisión, fue concedida por el Superior Tribunal provincial.

II

En la sentencia, la Cámara consideró probado que el imputado abusó sexualmente de su hija N., S. T. desde que contaba con nueve años de edad hasta el 27 de febrero de 2000 al accederla carnalmente bajo amenazas. Como consecuencia de esa relación incestuosa quedó embarazada y dio a luz a C. E. el 19 de noviembre de 1996.

En su alegato, la señora fiscal argumentó que en esos accesos sexuales medió intimidación y efectuó un análisis de los tipos penales de los artículos 122 -derogado por la ley 25.087- y 119, párrafos 1º y 3º del Código Penal, a la luz de la modalidad de delito continuado (v. fs. 389vta./390).

A su turno, la asistencia técnica planteó que la

acusación colocó a Tranamil en estado de indefensión por cuanto no se han individualizado en forma clara los hechos que se le atribuyen y que la víctima no precisó si en el primer evento tuvo lugar una cópula o un tocamiento, por lo que *favor rei* se debía encuadrar la conducta en el artículo 127, anterior a la reforma de la ley 25.087, y declarar la prescripción.

Por otro lado, solicitó su absolución respecto del hecho tras el cual la damnificada resultó grávida pues adujo que no se encuentra probada la existencia de intimidación o violencia (v. fs. 400/404).

El tribunal desechó esos argumentos sobre la base de que N. S. T. fue suficientemente clara en sus testimonios al describir los abusos sexuales que sufrió, como también que su versión, la pericia psicológica practicada, y la mendacidad evidenciada en el descargo del imputado, permiten tener por acreditado que en esas ocasiones mediaron amenazas.

III

Al recurrir en casación, el apelante tachó de nula la sentencia por carecer de descripción de las conductas constitutivas del objeto procesal, quebrantar la sana crítica racional en la valoración de la prueba y omitir la aplicación del principio *in dubio pro reo*.

Adujo que el tribunal estableció a partir del suceso inicial un período de una década sin solución de continuidad en el cual tuvo por demostrado el acceso carnal bajo intimidación, construcción que hace imposible cualquier contestación pues no se precisa cuándo, cómo, por qué procedimientos y con qué auxilios se producían esas amenazas.

Asimismo, alegó que sólo la víctima hizo mención a supuestas amenazas y que para superar la orfandad probatoria respecto de la existencia de ese requisito típico los jueces incorporaron los dichos vertidos por su madre en la denuncia policial, sin que haya testificado en dependencias judiciales ni en la audiencia de debate, lo



Ministerio Público

Procuración General de la Nación

Tranamil, Carlos Enrique p.s.a. abuso sexual agravado
S.C. T. 418, L. XL

que implicó conculcar el derecho previsto por los artículos 8.2.f de la Convención Americana de Derechos Humanos, 350 del Código Procesal Penal, *a contrario sensu*, y 46 de la Constitución local.

Por último, aseguró que tal escasez de elementos de convicción imponía un estado de duda que debía favorecer al imputado, por lo que se vulneró la presunción de inocencia de la que gozara.

La suprema corte provincial declaró la nulidad parcial del fallo con sustento en que la acusación fiscal planteó una continuidad delictiva imprecisa, vaga y genérica, aunque confirmó la legalidad de la imputación relativa al hecho que causó el embarazo de la damnificada y desechó los agravios referidos al análisis de la prueba por vincularse exclusivamente a ese evento y resultar ajenos a su competencia por vía de esa impugnación.

IV

En su apelación extraordinaria de fojas 457/470, el recurrente atribuye arbitrariedad al pronunciamiento del *a quo* por presentar consideraciones de orden general que no importan un tratamiento jurídico acabado y serio de las cuestiones planteadas en la casación que la descalifican como acto jurisdiccional válido al guardar sólo una apariencia de decisión fundada.

Expresó que en esa oportunidad se demostró la falta de motivación de la sentencia dada por la arbitraria apreciación de la prueba que hicieron los jueces, al tener por configurada y acreditada la intimidación típica por los dichos de N. S. T. y a través de la ilegal incorporación del testimonio de su madre y cónyuge del imputado, en clara violación al principio de contradicción, bilateralidad y control por parte del encausado, respecto de quien se desconoció el principio de inocencia y la garantía *in dubio pro reo*.

Agregó que, ante esa carencia de elementos de cargo que prueben la intimidación o violencia requerida por el delito analizado, se imponía la declaración de nulidad de la totalidad del pronunciamiento y que su anulación parcial implicó un desvarío lógico.

Por último, concluyó que mediante una resolución meramente formal y rechazando los motivos de agravios deducidos respecto de los vicios que presentaba la condena, se restringió en forma arbitraria el marco de la casación penal, por lo que se conculcaron los principios de debido proceso y de defensa en juicio, puesto que se vulneró el derecho a recurrir el fallo condenatorio ante un tribunal superior que consagran los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

V

En lo que aquí interesa, la defensa fundamentó su recurso de casación local en concretas críticas contra la sentencia que, en su opinión, permitirían afirmar que presenta una motivación aparente por no constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa.

Pese a ello, la suprema corte provincial rechazó el recurso intentado en relación a tales agravios al considerar que “no se demuestra falta o contradicción esencial en la fundamentación de la sentencia” y que a través de esa vía se “ejerce el contralor de la corrección del razonamiento del juez por aplicación de los principios fundamentales de la lógica y máximas de la experiencia, sin emitir opinión sobre la elección de los medios probatorios ni tampoco sobre la justicia de la decisión”.

Además, sostuvo que “los motivos de la impugnación contrarios a tal extremo tienen sustento en cuestiones de hecho o prueba, ajenas a la competencia extraordinaria de la impugnación casatoria”.

En tales condiciones, advierto que la cuestión que se pretende someter a conocimiento de V.E. guarda sustancial analogía con la planteada en la causa A. 2086, L. XL *in re* “Acuña, Andrés Francisco s/ homicidio simple -causa n° 91/03-”, en la que esta Procuración General dictaminó el 27 de octubre último. Por tal motivo, cabe dar por



Ministerio Público

Procuración General de la Nación

Tranamil, Carlos Enrique p.s.a. abuso sexual agravado
S.C. T. 418, L. XL

reproducidas, en lo pertinente, las razones allí vertidas, a las que me remito en beneficio de la brevedad.

VI

En conclusión, y sin perjuicio de lo que pueda luego resolverse acerca del fondo del asunto, opino que V.E. debe hacer lugar al recurso extraordinario y dejar sin efecto la resolución impugnada para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte una nueva conforme a derecho.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2006.

ES COPIA

EDUARDO EZEQUIEL CASAL